

Devolución;
29 MAR 2017.

000-1406

Favor hacer referencia a este número al dar respuesta

URGENTE

Villavicencio, 27 MAR 2017

Señor (a)
Representante legal
SINTRASALUDCOOP
Calle 4 Bis No. 20 A-09 Vizcaya 2
Villavicencio MetaASUNTO: Notificación por Resolución No. 099 del 13 de marzo de 2017.
Radicado No. 0693 del 22/02/2013

Por medio de este **AVISO**, y de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), se le Notifica el contenido del Auto 174 del 23/02/2017 asunto, expedido por la Coordinadora del Grupo Prevención, Inspección, Vigilancia, Control, Resolución de Conflictos Conciliaciones de la Dirección Territorial Meta. Lo anterior teniendo en cuenta que no fue posible realizar la Notificación personal del acto, conforme a lo establecido en los Artículos 67 y Siguyentes del mismo Código.

Atentamente,

**MERCEDES MORALES NARANJO**Coordinadora Grupo Prevención, Inspección Vigilancia, Control
Resolución de Conflictos - Conciliación

Anexos: dos (2) folios.

Copia:

Transcriptor: F. Cabrera
Elaboró: F. Cabrera
Revisó/Aprobó: Mercedes M.Calle 33 B 38-42 Villavicencio Meta, Colombia
PBX: 4893900 - FAX: 4893100
www.mintrabajo.gov.co



MINISTERIO DEL TRABAJO
DIRECCION TERRITORIAL DEL META

RESOLUCION N° 0099

(FEBRERO 28 DE 2017)

7050001-043

Querellante: SINDICATO SINTRASALUDCOOP
 Querrellado: CORPORACION IPS SALUDCOOP
 Radicado: No. 0693 DEL 22.02.2013
 Auto Comisorio 116 del 22.02.2013

"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS"

La suscrita Coordinadora Del Grupo de Inspección, Vigilancia y Control - Resolución de Conflictos y Conciliación de la Dirección Territorial Del Meta, en uso de sus facultades legales, en especial las contenidas en las resoluciones números 02401 del año 2015 y 2143 del 2014, y demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO

Que mediante Auto Comisorio No. 116 del 26 de febrero de 2013, es designado el Dr. EDGAR LIZANDRO TORRES MARTINEZ, Inspector del Trabajo adscrito a la Dirección Territorial del Meta con el fin de adelantar averiguación preliminar por Presunta violación a la ley Laboral individual (La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo las excepciones;) iniciada a solicitud de la Organización sindical SINTRASALUDCOOP con residencia en calle 4BIS No. 20 A 09 vizcaya2 ciudad de Villavicencio(Meta), representada en ese entonces por la señora MILBA ROCIO CASTELLANOS identificado con al cedula 52.164.604 de Bogotá, contra la empresa corporación IPS SLUDCOOP IDENTIFICADA con Nit. 800250119, con dirección de notificación en la calle 24 No. 39 - 48 barrio Bosque Alto de esta ciudad.

La organización querellante SINTRANSALUDCOL META mediante escrito radicado 693 de julio 22 de febrero de 2013, manifiesta que los directivos de CORPORACION IPS SALUDCOOP viola el artículo 161 de CST, el artículo 20 de la ley 50 de 1990 y decreto 1048 de 1978 al tener turnos que exceden la jornada de 6 horas diarias, permitiendo turnos de 12 horas continuas como lo manifiestan los cuadros de turnos de servicios de urgencias, partos, cirugía, hospitalización, laboratorios etc. donde el trabajador no solo hace el mismo turno en el mismo día de 7 am a 1pm si no que debe regresar en el mismo día para realizar turno de 7 pm a 7 am.

El querrellado no ejerce derecho de defensa comunicada mediante oficio radicado 1121. Mediante auto 00879 del 29 de octubre 2013 se formulan cargos y ordena la apertura del proceso administrado sancionatorio (f. 15), posteriormente por medio de Auto No. 570 (28 de julio de 2014) se enderezan las actuaciones administrativas para el debido proceso.

En diciembre de 2013 el Dr. EDGAR LISANDRO TORRES MARTINEZ, es trasladado al municipio de Puerto Lopez, y para efectos de continuar el presente trámite administrativo con Memorando fechado el 2 de enero de 2014 el expediente es entregado a la Dra. CLAUDIA MILENA FINO, (f. 28) quien no expidió ninguna clase de acto administrativo ni tampoco comunicó de la situación a las partes a pesar de haber estado en esta Dirección Territorial hasta octubre de 2015, fecha en la cual fue trasladada a la ciudad de Bogotá.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

En razón de su condición de actividad punitiva del Estado, la imposición de sanciones administrativas se encuentra sujeta al artículo 29 de la Constitución que consagra el derecho al debido proceso. De esta manera los principios del derecho penal –como forma paradigmática de control de la potestad punitiva– se aplican, con ciertos matices, a todas las formas de actividad sancionadora del Estado. El debido proceso, por su parte, comporta una serie de garantías como la publicidad y celeridad del procedimiento, el derecho de defensa y contradicción, el principio de legalidad del ilícito y de la pena, la garantía del juez competente, etc., que sólo

Escrito

Continuación Resolución por medio del cual se ordena el archivo de unas Diligencias Administrativas

tienen sentido referidas a la actividad sancionadora del Estado. Es decir son garantías aplicables al proceso de imposición de sanciones.

Sin embargo, la potestad sancionadora administrativa se diferencia cualitativamente de la potestad punitiva penal, por cuanto con ésta última, además de cumplirse una función preventiva, se protege "el orden social colectivo, y su aplicación persigue esencialmente (sin perjuicio de la concurrencia de otros fines difusos) un fin retributivo abstracto, expiatorio, eventualmente correctivo o resocializador, en la persona del delincuente", mientras que con la potestad administrativa sancionatoria se busca garantizar la organización y el funcionamiento de las diferentes actividades sociales. La Corte ha resaltado que la potestad sancionadora de la administración es un medio necesario para alcanzar los objetivos que ella se ha trazado en el ejercicio de sus funciones. "En efecto, la fracción de poder estatal radicada en cabeza de la administración, se manifiesta a través de una gama de competencias o potestades específicas (de mando, ejecutiva o de gestión, reglamentaria, jurisdiccional y sancionadora), que le permiten a aquella cumplir con las finalidades que le son propias"

A las consideraciones anteriores sobre la jurisprudencia constitucional colombiana, es importante agregar que ésta se inscribe dentro de una tendencia, en varias democracias, a garantizar el debido proceso en materia de sanciones administrativas sin trasladar automáticamente el mismo rigor garantista del derecho penal, ni desatender las especificidades de este tipo de sanciones en cada uno de los contextos donde han sido establecidas por el legislador.

En desarrollo del principio del debido proceso, la Corte Constitucional en Sentencia C-401 de 2010, resaltó que la potestad sancionadora de las autoridades titulares de funciones administrativas, en cuanto manifestación del *ius puniendi* del Estado, está sometida al principio de prescripción que garantiza que los particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la puesta en marcha de los instrumentos sancionatorios.

De dicha jurisprudencia constitucional se desprende, entonces, el criterio conforme al cual la facultad sancionadora del Estado es limitada en el tiempo y que el señalamiento de un plazo de caducidad para la misma, constituye una garantía para la efectividad de los principios constitucionales de seguridad jurídica y prevalencia del interés general. Dicho plazo, además, cumple con el cometido de evitar la paralización del proceso administrativo y, por ende, garantizar la eficiencia de la administración.

Reiteradas sentencias de la Corte Constitucional han expresado que la potestad sancionatoria no puede quedar indefinidamente abierta, y si el Estado no ejercita el derecho que tiene de adelantar y fallar la investigación disciplinaria en el tiempo fijado por el legislador, ya sea por desinterés, insuficiencia de recursos administrativos, o cualquier otra situación atribuible al ámbito de su competencia, no puede el administrado sufrir las consecuencias que de tales hechos se derivan.

En ese sentido, tanto la jurisprudencia constitucional como la del Consejo de Estado, han sido reiterativas al identificar entre las características de la facultad sancionadora del Estado las siguientes:

- La facultad sancionadora del Estado es limitada en el tiempo.
- El señalamiento de un plazo de caducidad de la acción sancionadora del Estado, constituye una garantía para la efectividad de los principios constitucionales de seguridad jurídica y prevalencia del interés general.
- Las garantías procesales se consagran para proteger los derechos fundamentales del individuo y para controlar la potestad sancionadora del Estado.
- La finalidad de establecer un plazo de caducidad de la acción sancionadora no es otra que la de evitar la paralización del proceso administrativo y, por ende, garantizar la eficiencia de la administración.

Tesis del Consejo de Estado sobre la caducidad de la facultad sancionatoria

Vale la pena señalar que con la redacción del artículo 38 del C.C.A. del decreto 01 de 1984 surgieron diferentes teorías jurisprudenciales, tratadas por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, relacionadas con el acto o actuación por parte de la Administración que interrumpe el término de caducidad, advirtiendo que el criterio expuesto se hace cada vez más exigente o restrictivo. Sin embargo, con la expedición de la ley 1437 de 2011, la controversia doctrinaria quedó zanjada en el artículo 52 que estableció: "Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiese ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver. (...)"

Continuación Resolución por medio del cual se ordena el archivo de unas Diligencias Administrativas

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Una vez estudiado el expediente, se puede evidenciar que ha transcurrido el término señalado por el artículo 52 en cita, en donde esta autoridad disponía de un término de tres (3) años contados a partir de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Entonces, como quiera que los hechos datan desde abril de 2013, esta autoridad pierde la facultad sancionatoria y por ello se procederá aplicar la caducidad.

De otra parte, es preciso recordar que la ley no ha previsto ninguna causal de interrupción, suspensión o prórroga del término de caducidad establecido en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, y por ende no es posible suspender o prorrogar dicho término, toda vez que se observa claramente que ha caducado la oportunidad que tiene la administración para imponer sanciones y resolver recursos por la presunta vulneración de las garantías sindicales contra del empleador.

Así las cosas, es evidente para este Despacho que operó el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria, y como se explicó en el párrafo precedente, a la fecha ya han transcurrido tres (3) años, otorgados por la norma a las autoridades para imponer sanción.

En mérito de lo expuesto, la suscrita Coordinadora del Grupo de IVCRCC,

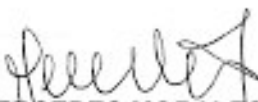
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la caducidad administrativa dentro de las diligencias administrativas laborales iniciada a solicitud de la Organización sindical SINTRASALUDCOOP con residencia en calle 4BIS No. 20 A 09 Vizcaya 2 ciudad de Villavicencio(Meta), representada en ese entonces por la señora MILBA ROCIO CASTELLANOS identificado con al cedula 52.164.604 de Bogotá, contra la empresa corporación IPS SLUDCOOP IDENTIFICADA con Nit. 800250119, con dirección de notificación en la calle 24 No. 39 - 48 barrio Bosque Alto de esta ciudad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes jurídicamente interesadas, conforme a lo establecido en el artículo 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011, para lo cual se le informa el derecho de interponer los recursos de reposición y en subsidio apelación dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO.- ENVIAR copia del presente proveído a la Oficina de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE



MERCEDES MORALES NARANJO

Coordinadora de Grupo Prevención, de Inspección, Vigilancia y Control
Resolución de Conflictos - Conciliación

Digito/ Proyecto/ Elaboro: Mercedes M.
Reviso/Aprobó: Mercedes M.

472	Motivos de Devolución	<input type="checkbox"/>	Desconocido	<input type="checkbox"/>	No Existe Número
		<input type="checkbox"/>	Rehusado	<input type="checkbox"/>	No Reclamado
<input type="checkbox"/>	Dirección Errada	<input type="checkbox"/>	Cerrado	<input type="checkbox"/>	No Contactado
<input type="checkbox"/>	No Reside	<input type="checkbox"/>	Fallecido	<input type="checkbox"/>	Apartado Clausurado
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Fuente Mayor		
Fecha 1:	DI	ME	ASO	R	D
20	MAR	2017			
Nombre del distribuidor:	WILLINTON TRIVIÑO				
C.C.	C.C. 30-053147 de WAO				
Centro de Distribución:					
Observaciones:	Cerca 1 pzo amarillo				

